

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE RIOHACHA  
SALA DE DECISION CIVIL- FAMILIA- LABORAL

HOOVER RAMOS SALAS  
Magistrado Ponente

Riohacha (La Guajira), cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Proceso:	Contrato de Trabajo - Impedimento.
Demandante:	Julio Flórez Acosta
Demandado:	Empresa de Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda. - Sepecol Ltda.
Radicación:	44650.31.05.001.2015-00351.01
Especialidad:	Laboral

### 1. OBJETIVO:

Valorar la **legalidad** del impedimento expuesto por el señor Juez Laboral del Circuito de San Juan del Cesar.

### 2. SINOPSIS:

Mediante interlocutorio adiado siete (7) de junio último, el operador judicial referido expresa su impedimento para proseguir impulsando este proceso con sustento en el artículo 141, numeral 7º del Código General del Proceso, señalando que el representante legal de Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda., Sepecol Ltda., formuló denuncia en su contra ante Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de La Guajira, motivo para que arribe el expediente a esta corporación con la finalidad de designar su reemplazo en caso de estimarse fundada la causal invocada.

### 3. CONSIDERACIONES:

Asume este despacho la competencia funcional que otorga el artículo 144 del Código General del Proceso, importando evocar que por mandato del artículo 29 superior en el curso de toda causa judicial los sujetos procesales deben tener la seguridad de un juicio plegado al respeto de las formas y garantías fundamentales, incluyendo la convicción que su juez natural resguardará de cualquier menoscabo, operando inclusive de cara a las propias circunstancias personales del juzgador, luego ese derecho mínimo comprende aquellos motivos que conducen al operador judicial a ver restringida su potestad para aprehender y resolver un asunto determinado, ya por razones subjetivas, ora por aspectos objetivos, estructurando las causales de impedimento o recusación previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso, ostentando naturaleza taxativa, restrictiva, limitativa y de aplicación e interpretación estricta sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analogía legis o iuris<sup>1</sup>.

Ahora bien, el artículo 141, numeral 7º del Código General del Proceso, regula como causal de impedimento: “(...) *Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación (...)*”, extracto normativo que consagra la razón invocada por el señor Juez Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, ya que la imparcialidad y el buen juicio que se requiere en cumplimiento de su labor no debe estar resquebrajada.

Puestas así las cosas, resulta pertinente traer a colación un pasaje jurisprudencial explicativo de la causal exteriorizada: “(...) *Como quiera que la disposición invocada (art. 99-10 C.P.P. de 2000, art. 56-11 Ley 906 de 2004) prevé como causal de impedimento que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hayan formulado cargos, por denuncia instaurada, antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos procesales, precisando que, si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del proceso procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente*

---

<sup>1</sup>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Auto de 19 de abril de 2012. Expediente 11001 31 03 028 1997 09465 01.

*al funcionario judicial, resulta claro que, según el momento en que se instaure la queja, querrela o denuncia, se consagran así dos situaciones diversas con supuestos igualmente diferentes, pues, si aquella se presenta antes de que se inicie el proceso penal, el impedimento será viable sólo si, en contra del funcionario judicial denunciado se han formulado cargos, vale decir, se ha proferido resolución de acusación, si ese asunto penal se trata, o se le ha dictado auto contentivo de pliego de cargos, si de asunto disciplinario se refiere.*

*Empero, cuando la denuncia se ha presentado luego de iniciado el proceso penal, la situación impeditiva se materializa sólo en la medida en que el funcionario judicial sujeto de aquella, haya sido jurídicamente vinculado al proceso penal o disciplinario, entendido que en el primero tal acto se surte, de conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, una vez el imputado sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente (CSJ AP, 11 Nov. 2009, Rad. 33012) (...)”<sup>2</sup>.*

A su turno, plantea el procesalista Hernán Fabio López Blanco en relación con la previsión legal: “(...)Sin duda alguna, el ánimo prevenido que se crea contra una persona que denuncia penalmente o disciplinariamente a otra, o a su cónyuge, compañero permanente, padres o hijos, justifica plenamente la existencia de esta causal, la cual sin embargo ha sido objeto de unas particulares precisiones al señalar la norma que **únicamente** puede proponerse la recusación cuando la denuncia se formuló antes de iniciarse el proceso (...) o “después, **siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación (...)”<sup>3</sup>.**

Efectuada la anterior delimitación conceptual, resulta plausible colegir que debe respaldarse la postura asumida por el señor juez, ya que la certificación incorporada en virtud del proveído que data de diecinueve (19) de septiembre anterior revela que la radicación del proceso disciplinario data del año dos mil quince (2015), amén de corroborar que la queja fue interpuesta por el representante legal de Sepecol Ltda., puntualizando que el proceso está en la fase de investigación desde el

<sup>2</sup>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia de 18 de agosto de 2016. M. P. Dr. ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

<sup>3</sup>LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Dupré Editores. Bogotá D.C., 2016. Página 276.

veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), datos objetivos que examinados en su conjunto permiten inferir que está probada la **vinculación material** del funcionario judicial a la investigación disciplinaria, aunque se desconozca si los hechos tienen relación directa con este proceso que también inició en esa calenda (2015), perspectiva donde es plausible respaldar la abdicación en esta fase procesal de ejecución de la sentencia.

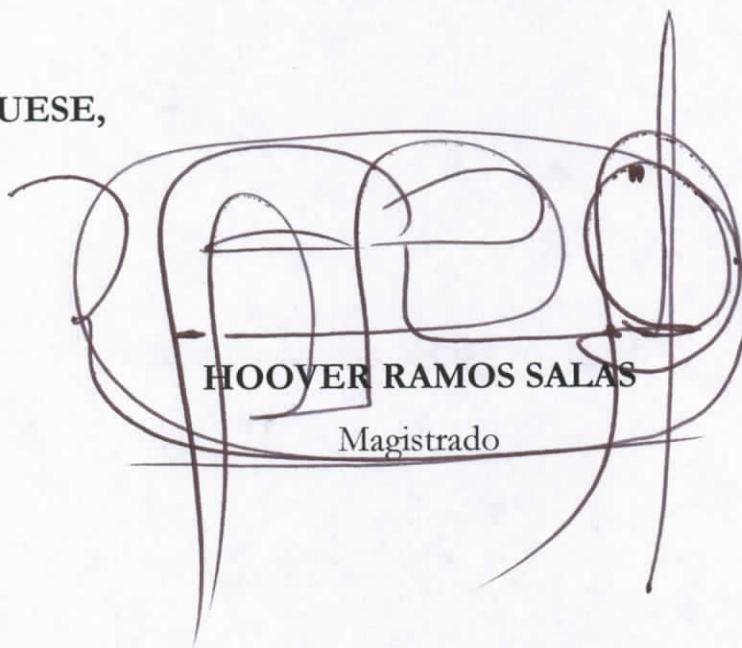
Por lo brevemente expuesto, el suscrito magistrado como integrante de esta Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR fundado** el impedimento exteriorizado por el titular del Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, según explica la motivación.

**SEGUNDO: ORDENAR** la remisión del expediente con radicación 44650.31.05.001.2015-00351.01 para que sea asumido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, despacho que continuará el trámite procesal.

**NOTIFÍQUESE,**



**HOOVER RAMOS SALAS**  
Magistrado

IL.64/HR